

Presentación

A mitad de camino

Finalizado el segundo año de la administración Piñera, las tendencias que tímidamente se insinuaron en los inicios de su gobierno han adquirido una presencia más visible y estable. La estrategia gubernamental, que tempranamente caracterizamos de "presidencialismo plebiscitario", tuvo sus mayores éxitos durante el primer año de gobierno, pero comenzó rápidamente a declinar en este segundo período cuando la aprobación presidencial llegó a pobres niveles de aceptación y altos grados de desaprobación. De igual forma, la conformación de un Ejecutivo técnico dejó rápidamente paso a figuras de mayor tonelaje político y la inicial homogeneidad ideológica y política de la Coalición para el Cambio -reducida en la práctica a la Alianza- se pulverizó, reapareciendo las viejas fisuras tectónicas entre dos derechas ideológicamente irreconciliables.

En este contexto, la dinámica política durante este segundo año generó crecientes tensiones al interior y entre las fuerzas de apoyo al régimen. Esto se tradujo en mayores niveles de ineficiencia en la resolución de problemas nacionales y sectoriales, tanto de agenda como emergentes. Frente a este embotamiento político, las movilizaciones sociales -políticamente transversales- pusieron en jaque al Ejecutivo, el que finalmente mostró su cara más autoritaria al reprimir a los manifestantes con un uso excesivo de fuerza, para luego acceder a sus peticiones.

Escrutando las causas más profundas del por qué estas movilizaciones sociales explotaron en este período, hay dos elementos a tomar en consideración.

El primero son los problemas que se arrastraron durante las dos décadas concertacionistas sin ser adecuadamente resueltos. Sin embargo, al mismo tiempo, sus gobiernos fueron ampliando los derechos y conciencia ciudadana, afirmando su titularidad y apropiación no solo individual, sino fundamentalmente grupal. De esta forma, en este segundo año de la administración Piñera, la

exigencia ciudadana adquirió connotaciones sociales -multiclasistas e intergeneracionales- que se expresaron en persistentes demandas medio ambientales, educacionales, de salud, descentralización y probidad, entre otras. Ante las políticas implementadas por la actual administración, que han extremado la expansión del lucro y renta privados, la ciudadanía reaccionó demandando con nueva energía la superación del rol subsidiario del Estado y su reemplazo por uno estratégico y protector de los bienes colectivos, así como un cambio radical en el sistema de representación.

Un segundo factor que ayuda a explicar la situación antes descrita, es el fundamentalismo que ha caracterizado la gestión gubernamental desde sus inicios. Inicialmente se pretendió restaurar la pureza de la economía de mercado neo liberal, aplicándola estrictamente en todos los aspectos de la vida económica y social, basados en una interpretación de la economía neo clásica y exigiendo el sometimiento a esta doctrina a través de prácticas y políticas públicas que le fueran consistentes.

Por una parte, esta intransigencia más que cohesionar a las fuerzas de derecha terminó confrontando a ortodoxos y heterodoxos en materias económicas y, en el plano valórico, a liberales y conservadores, todo ello sin claras líneas partidarias. Por otra parte, al intentar traducirse en políticas públicas, esta postura se convirtió de hecho en un factor de división nacional. En la medida que las soluciones a los problemas enfrentados fueron elaboradas a partir de reducidas convicciones de elite, más que formuladas a partir de una sana articulación de los intereses y propuestas desde la diversidad social, el conflicto social emergió con fuerza. Este fundamentalismo ha permeado las políticas públicas en estrecha relación con los grupos económicos, generando conflictos en el intento del sector privado por capturar mayores espacios al interior del Estado. Igualmente, en temas con alto contenido valórico se ha tendido a gobernar para una minoría, no para el conjunto del país.

La preeminencia de las convicciones -ideológicas y/o religiosas- de los funcionarios de gobierno y parlamentarios de la Alianza, han orientado políticas públicas inspiradas en sus propios valores más que en la preocupación por responder, como Estado secular, a la amplia diversidad nacional.

De esta forma, no es extraño que en el último año Chile haya sido remecido por conflictos sociales frente a los cuales el Ejecutivo ha reaccionado agudizando, más que resolviendo, las tensiones y problemas.

Por su parte, la emergencia de factores estructurales ha complicado aún más este escenario. Así, a pesar de las buenas señales de comienzos de año, se observa una desaceleración estructural de la economía al desaparecer el componente de recuperación y normalización de la producción pos terremoto, un incremento del déficit de la balanza de pagos, aumento de la inflación y pérdida de dinamismo de la inversión.

En el campo de las políticas sociales se han ampliado significativamente las oportunidades de negocio del sector privado en educación y salud. En salud, esta privatización fragmenta y genera lógicas contrapuestas entre el funcionamiento del sistema público y el privado. Todo lo cual evidencia que el país pasa por una encrucijada en la que se han puesto en juego los rasgos principales del sistema de seguridad social. En el área educacional, al término de las movilizaciones quedó en evidencia que la postura del gobierno ha predominado y que el modelo neo liberal vigente no se ha alterado, lo que ha generado el espacio y argumentos para nuevas movilizaciones estudiantiles.

Igualmente, en los nudos centrales demandados por el sector laboral no se ha avanzado mucho, la agenda legislativa en ambas Cámaras es escuálida y el empresariado actúa con menos reproches frente a abusos e incumplimiento laborales. Con todo, el nuevo post natal y el acuerdo CUT-CPC, han significado cierto avance. En este último, dentro de múltiples limitaciones, es rescatable el acuerdo de fijar como piso de la negociación salarial, la anterior, y que se haga mención al efecto en materia de derechos colectivos que tendría la calificación de empresa en la nueva ley sobre el multi RUT. Sin embargo, muchos de los aspectos más conflictivos han quedado para la elaboración de comités de expertos, habitualmente dominados por los intereses empresariales.

La gestión del gobierno en materia de comunicaciones ha seguido la misma ruta favorecedora del sector privado en detrimento de los derechos y oportunidades ciudadanas, lo que ha profundizado la tendencia a la concentración creciente del mercado de las telecomunicaciones y no se ha facilitado el acceso masivo a los medios y redes digitales en condiciones igualitarias. En las redes digitales y las telecomunicaciones se observan dos tendencias preocupantes: la concentración de la propiedad, aun más marcada que en los medios masivos, y la profundización de la brecha digital. Así, el debate legislativo en torno a la Ley de Televisión Digital Terrestre, que se desarrolló durante el 2011, dejó pendiente la discusión de más de 500 recomendaciones planteadas por organizaciones de la sociedad civil. En 2012 un documento propuesto por el gobierno, en un proceso destacado por su falta de transparencia, se reinició el debate. A casi un año de la media sanción de la Ley en la Cámara de Diputados, favoreciendo a los actuales grandes operadores, se desconoce la acogida que puedan tener las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil para introducir modificaciones al proyecto original.

En el ámbito urbano, las intervenciones inmobiliarias en las ciudades sobrepasan las regulaciones municipales o de la Ley General de Urbanismo y Construcción que guía el crecimiento de las ciudades. El peso de las grandes empresas inmobiliarias y constructoras sobrepasa no solo las regulaciones municipales y del Minvu, sino que también su poder administrativo. Esto se evidencia en los casos del centro comercial de Castro y las discriminaciones sociales en urbanizaciones de Santiago. Así, la respuesta ciudadana ha sido protestar.

El año 2011 se inició con el paro indefinido convocado por la Asamblea Ciudadana de Magallanes, para protestar contra el alza del gas en la Región, y el 2012 comenzó con las movilizaciones del Movimiento Social por la Región de Aysén. La organización se mantuvo, logró apoyo transversal regional y nacional, dejó de lado en su camino a la intendenta, a ministros sectoriales, y logró negociar en La Moneda. La otra alternativa ha sido ganar plebiscitos locales como en Peñalolén, donde el alcalde Claudio Orrego perdió la aprobación de su propuesta de Plan Regulador. Como respuesta, el gobierno tramita en el Congreso una modificación a la Ley de Participación Ciudadana de febrero de 2011 -que había reducido del 10 a 5 por ciento la cantidad de ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna para llamar a plebiscito en materias de interés para la comunidad local-, para volver a ampliar del 5 al 10 ese porcentaje.

La agenda ambiental del 2012 contiene importantes, diversos y controvertidos temas nacionales e internacionales. En el plano internacional se encuentra en tabla la revisión que realizará Rio+20 y, en el ámbito nacional, se tienen agendados críticos debates y decisiones en torno al litio; los proyectos eléctricos de Hidroaysén, Pichidegua y Castilla; la contaminación en La Greda; proyectos inmobiliarios como el de Panul en La Florida; el tema de los incendios forestales, y, no menos importante, las cuotas de pesca. En todos estos temas se confrontarán, nuevamente, los intereses privados y los colectivos, lo que indudablemente generará presiones por nuevas y más amplias movilizaciones sociales.

La tensión mercado-Estado también ha dado en el espacio cultural. En éste se presentaron, además, permanentes problemas de gestión, manifestados en la instauración de un sistema de postulación a concursos que fracasó, la rotación de subsecretarios, la falta de pluralismo y ausencia de paridad de género en el Consejo Nacional de la Cultura. Por su parte, el fomento a los públicos y audiencias y los programas de teatros regionales, nuevos centros culturales, contrasta con un consumo cultural que a pesar de tales esfuerzos continúa bajo. El genuino apoyo al patrimonio arquitectónico se ha confrontado con la presión privada por la construcción de centros comerciales en espacios patrimoniales. Frente a estas realidades, y en la medida que la insistencia en la creación del ministerio de la Cultura contempla la participación de la sociedad civil *à la mode*, la iniciativa tal como se ha mostrado últimamente genera entendibles suspicacias.

En materia de políticas hacia la mujer, la falta de consideración a la equidad de género como valor relevante para orientar la acción pública, ha sido sustituida por la empleabilidad femenina, con especial atención en la madre trabajadora de escasos recursos. Así, las mujeres son sujeto de la política pública en cuanto intermediadoras entre los bienes y servicios públicos y su grupo familiar. En materia de participación política y promoción de las mujeres en cargos de representación no se ha avanzado. A la amenaza del veto presidencial y a la posición de la derecha, se ha sumado gran parte de los senadores DC, impidiendo la discusión de una ley de despenalización del aborto terapéutico. El Sernam, como institución coordinadora de políticas públicas, ha derivado en ser una interfase entre el Estado y el sector privado, y la ejecución de sus políticas ha sido crecientemente externalizada por los ministerios sectoriales, perdiendo así relevancia y capacidad de incidencia.

El uso desproporcionado de la fuerza ha quedado graficado en

la represión por parte del grupo especial de fuerzas policiales al mundo indígena. A pesar de ello, sus dirigentes perciben que pueden ser actores relevantes en la lucha por sus derechos esenciales. Se observa un cambio de ciclo histórico demandando el fin de la discriminación, el racismo y la intolerancia, encontrando que la sola integración cultural no es suficiente. El desafío estratégico de los pueblos originarios está siendo asumido por una nueva generación formada en universidades, vinculada con redes sociales y con un gran desempeño en el campo de las redes virtuales. No son indígenas sumisos que esconden su identidad o se rinden fácilmente ante las humillaciones centenarias y policiales actuales.

Estas tendencias, acumuladas en dos años de gobierno de la derecha, no han sido sólida y sustantivamente respondidas por los partidos de la oposición, dejando como actores centrales a las organizaciones sociales que han asumido esta responsabilidad. De tal forma, en este período no sólo ha quedado en evidencia la debilidad de los actores políticos, sino que fundamentalmente se ha demostrado la necesidad de nuevas instituciones democráticas.

Abril, 2012.